
PROYECTO DE LEY ____ DE 2011

“Por medio del cual se simplifica el inventario de bienes de menores de edad”

**El Congreso de Colombia
DECRETA:**

Artículo 1°. El artículo 169 del Código Civil Colombiano quedará así:

Artículo 169. *Inventario Solemne de Bienes.* La persona que teniendo hijos bajo su patria potestad o personas bajo su tutela y curatela, quisiere casarse o conformar unión marital de hecho, deberá proceder a elaborar el inventario de los bienes que está administrando, de la persona a su cargo.

Para la elaboración de este inventario, se nombrará a dichos hijos o personas bajo su tutela o curatela, un curador especial, quien tendrá la obligación legal de identificar plenamente en el inventario los bienes de propiedad de quien representa de la siguiente forma:

1. Cuando se trate de bienes inmuebles, deberá señalar el modo y título de adquisición de los bienes consignados en el inventario.
2. Para bienes inmuebles o para bienes muebles con un valor igual o superior a los cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50s.m.l.m.v.), este inventario deberá ser solemne.
3. Cuando se trate de bienes muebles inferiores a la cuantía establecida en el numeral anterior, bastará que el curador especial suscriba el inventario de bienes.

Artículo 2°. El artículo 170 del Código Civil Colombiano, quedará así:

Artículo 170. No habrá lugar al nombramiento de curador, cuando los hijos bajo patria potestad, o las personas bajo tutela o curatela, de quien pretenda contraer nupcias o conformar unión marital de hecho, no tengan bienes propios de ninguna clase.

En tal evento, bastará que quien pretenda contraer las nupcias o conformar la unión marital de hecho referidas en el inciso anterior, así lo declaren bajo juramento ante notario público o juez de familia o promiscuo o ante la autoridad competente en caso de no existir en el municipio notario o juez.

Parágrafo. La falta a la verdad en la declaración, hará acreedor a quien pretende contraer nupcias o conformar unión marital de hecho, a las sanciones penales correspondiente y a la pérdida del usufructo legal de los bienes que administra, y a una sanción pecuniaria consistente en una multa a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de imposición de la multa.

La multa será impuesta por el notario o por el juez ante quien se hizo la declaración jurada a petición de cualquier persona, del Ministerio Público o del Defensor de Familia.

Artículo 3°. El artículo 171 del Código Civil Colombiano, quedará así:

Artículo 171. Los jueces, notarios o la autoridad competente, se abstendrán de autorizar el matrimonio, hasta cuando la persona que pretenda contraer nupcias o conformar unión marital de hecho, presente copia auténtica de la providencia judicial o acta notarial por la cual se le designó curador a los hijos o a la persona bajo tutela o curatela, del auto que le designó el cargo y del inventario solemne de los bienes, o de la declaración juramentada sobre la inexistencia de bienes, según corresponda.

En todo caso, se le advertirá a la persona sobre las consecuencias jurídicas de ocultar la información respecto de la existencia de bienes del hijo o de la persona sujeta a tutela o curatela.

Parágrafo. La violación de lo dispuesto en este artículo, ocasionará respecto del juez, notario o a la autoridad competente, una sanción pecuniaria consistente en una multa a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la imposición de la multa, sin perjuicio de las acciones disciplinarias a que hubiere lugar. Dicha multa se impondrá al respectivo juez o notario por el Consejo Superior de la Judicatura o por la Superintendencia de Notariado y Registro, según el caso, a petición de cualquier persona, del Ministerio Público, o del Defensor de Familia.

Artículo 4°. Vigencia y derogatorias. La presente ley regirá a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 2817 de 2006.

De los honorables Congresistas,

PROYECTO DE LEY ____ DE 2011

“Por medio del cual se simplifica el Inventario de bienes de menores de edad”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley, tiene por finalidad seguir protegiendo los derechos patrimoniales de los niños, niñas, adolescentes y de las personas bajo tutela y curatela, y equilibrar los derechos de los padres en relación con los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

El proyecto de ley busca fundamentalmente los siguientes cinco (5) objetivos:

1. Contribuir a la descongestión de los despachos judiciales en el área del derecho de familia, llevando el proceso de confección del inventario solemne a ser un trámite notarial, cuando se desee contraer nupcias o constituir la unión marital de hecho.
2. Evitar procesos innecesarios y costosos de quienes, teniendo hijos menores de edad o personas bajo su tutela o curatela sin bienes propios, desean contraer matrimonio o constituir unión marital de hecho.
3. Agilizar estos procesos, cuando sean necesarios, pues aun siendo de jurisdicción voluntaria, el lapso para obtener una decisión puede ser de ocho (8) a doce (12) meses aproximadamente.
4. Desarrollar el derecho constitucional consagrado en el artículo 13 de la Carta Superior, respecto de quienes deseen contraer nupcias o constituir unión marital de hecho, teniendo hijos menores de edad o personas bajo su tutela o curatela.
5. Proteger el patrimonio del hijo menor de edad o de quien estando bajo tutela o curatela tiene bienes propios.

En la actualidad los jueces colombianos se ocupan de numerosas causas relacionadas con el Inventario Solemne de Bienes de Menores, para segundas nupcias y simplificar este proceso ayuda a agilizar este trámite, que se considera necesario para la protección patrimonial de los menores y que además la Corte Constitucional lo ha declarado exequible a través de la sentencia C-812 de 2001, como se expone: “Así pues, las medidas consagradas en los artículos 169 y 170 del Código Civil y el artículo 3º del decreto Ley 2668 de 1998 se enmarcan dentro de las limitaciones que a la luz de la Constitución es posible imponer al principio de la buena fe. Máxime si se tiene en cuenta que se trata de niños, quienes además de estar contemplados en la protección genérica de personas en estado de debilidad contemplada por el artículo 13 de la Carta Política, gozan de una protección especial por el artículo 44, según el cual la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, los cuales prevalecen sobre los derechos de los demás...”¹

¹ Corte Constitucional C812 de 2001.

Sin embargo el presente Proyecto de Ley, refuerza lo establecido por la ley, en el sentido de mantener la norma y la hace más ágil y efectiva, sin que se desgaste el aparato judicial y evita demoras y gastos innecesarios.

Para muchas personas en Colombia ha sido un obstáculo, por diferentes causas, la existencia de un proceso judicial previo y obligatorio, con miras a contraer segundas nupcias o conformar una unión marital, existiendo hijos menores, así estos últimos no tengan bienes. La ley original, reguladora de esta materia, no solo consagra que sean de precedente matrimonio, y requisito para volverse a casar, sino que no menciona la unión marital, la cual es ahora una forma de constituir pareja y familia, ampliamente reconocida por la Constitución Política en su artículo 42, y con múltiples pronunciamientos garantistas que han redundado en su desarrollo jurisprudencial (Sentencias C-105 de 1994, C-289 de 2000, C-812 de 2001).

Según la Constitución, son igualmente dignas de respeto y protección las familias originadas en el matrimonio o constituidas al margen de este. La igualdad pugna con toda forma de discriminación basada en el origen familiar, ya sea ejercida contra los hijos o contra descendientes de cualquier grado. De tiempo atrás, la ley colombiana ha establecido la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos.²

De la misma manera nuestro Código Civil, en algunos apartes ha quedado rezagado por la terminología que usa o por asuntos no previstos en su normatividad.

Es por ello que este proyecto de ley pretende que se incorpore la unión marital dentro del articulado que se ha establecido para el inventario de bienes de menores, y busca excluir las expresiones: **de precedente matrimonio volver a artículos 169 a 171**, por cuanto podrían ser violatorias de derechos fundamentales como la igualdad, la familia y la dignidad humana.

Cada iniciativa legislativa debe complementarse con la experiencia real de lo que se quiere elevar estatus jurídico. Es así, como se han evidenciado mujeres y hombres solteros, divorciados o viudos, con hijos menores que no poseen bienes, y que deciden casarse o formalizar una unión marital y por este requisito (proceso judicial), se les retardan actividades y proyectos de realización personal.

Por ello, este proyecto busca, que si el niño, niña, adolescente o la persona sujeta a tutela o curaduría de quien opta por celebrar matrimonio o constituir unión marital de hecho, no tiene bienes propios, baste con su declaración juramentada ante notario, en la que certifique o corrobore esta situación, para que se le expida la autorización tendiente a modificar su Estado Civil.

Es de señalar que con la Ley 962 de 2005, llamada comúnmente Ley **anti trámites**, se le otorgó competencia legal a los notarios para que en sus despachos, se pudiera adelantar el trámite de petición del inventario solemne de

² Corte Constitucional C 209 de 2000.

bienes (***teniendo o no teniendo los niños bienes***) y protocolización de la escritura pública, pero dicha norma no autorizó al notario para efectuar el nombramiento del curador para la declaración juramentada ante él, sino que sigue esta función en cabeza del juez, lo que dilata este proceso. (Decreto 2817 de 2006, artículos 7° y ss.).

De igual forma, con este proyecto se mantiene la protección de los niños, niñas y adolescentes o personas sujetas a tutela o curaduría y sus bienes, haciéndola compatible con la buena del padre o la madre, quien en caso de faltar a ese principio incurrirá en las sanciones de ley pertinentes, tanto a nivel civil como penal.

Es necesario advertir que esta iniciativa fue presentada en la anterior legislatura en la Cámara de Representantes, y durante el tránsito que hizo en la Comisión Primera fue designado como Ponente el honorable Representante William Vélez, quien rindió ponencia positiva introduciéndole aportes importantes. Aunque la ponencia no fue discutida, los argumentos planteados en ella fueron tenidos en cuenta en esta nueva presentación del proyecto.

Con base en lo expuesto, solicitamos a los honorables Congresistas acoger la presente iniciativa.

IMPACTO FISCAL

Con relación al estudio de impacto fiscal que ordena la Ley 819 de 2003, la Corte Constitucional se ha pronunciado, entre otras, en sentencias como las: C-490 de 1994, C-343 de 1995, C-685 de 1996, C-197 de 2001, C-1250 de 2001, C-1113 de 2004, C-500 de 2005, C-729 de 2005 y C- 290 de 2009; en donde desarrollan, entre otros temas, el principio de anualidad, el principio de legalidad del gasto público y la forma como el Gobierno puede hacer las inclusiones necesarias en el Presupuesto General de la Nación, en lo que tiene que ver con la constitucionalidad y la competencia legislativa para declarar un gasto público.

Así mismo, mediante Sentencia C-985 de 2006, la Honorable Corte Constitucional se pronunció sobre la iniciativa que tienen los congresistas en materia de gasto, así:

“Del anterior recuento se desprende que la Corte Constitucional ha establecido i) que no existe reparo de constitucionalidad en contra de las normas que se limitan a autorizar al Gobierno para incluir un gasto, pero de ninguna manera lo conminan a hacerlo. En estos casos ha dicho la Corporación que la Ley Orgánica del Presupuesto no se vulnera, en tanto el Gobierno conserva la potestad para decidir si incluye o no dentro de sus prioridades, y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, los gastos autorizados en las disposiciones cuestionadas...”

Además, la misma Corporación, en Sentencia C- 290 de 2009, al respecto dijo:
“La Corte observa que en el artículo objetado nada hay que permita asimilar sus enunciados a una orden dotada de carácter imperativo y de conformidad con la cual se pretenda privar al Gobierno Nacional de la facultad de decidir si incorpora

o no el gasto autorizado dentro del presupuesto, pues, al contrario de lo que sostiene el ejecutivo, en los términos utilizados por el legislador no se avizora presión alguna sobre el gasto público, sino el respeto del ámbito competencial que corresponde al Gobierno, al cual se le reconoce la posibilidad de considerar la incorporación de las partidas presupuestales y de hacerlo de acuerdo con los recursos disponibles y con los lineamientos del marco fiscal de mediano plazo. No se configura, pues, por el aspecto que se acaba de examinar, motivo de inconstitucionalidad que conduzca a la invalidación del artículo objetado”.

De conformidad con los argumentos jurídicos señalados anteriormente, es preciso advertir que la presente iniciativa no ordena gasto adicional ni tampoco otorga beneficios tributarios, tal y como lo advierte el art. 7º de la Ley 819 de 2003; por lo tanto, esta iniciativa no genera impacto fiscal.

De los Honorables Congresistas,